

Se busca portero para el silencio

**Herramientas legislativas que permitan que el silencio
de la persona acusada no ingrese al proceso**

Derecho Penal y Procesal Penal

Autor: Juan Cruz García

Universidad de Morón

Dirección: Carlos Casares 1055, Castelar, partido de Morón

Teléfono: 11 3756 9138

Mail: garcia.juancr@gmail.com

Se busca portero para el silencio

Herramientas legislativas que permitan que el silencio de la persona acusada no ingrese al proceso

Juan Cruz García*

RESUMEN

El acusado en un proceso penal, generalmente en todos los ordenamientos jurídicos de occidente, es titular de un derecho constitucional contra la autoincriminación. De esta manera, existe un freno jurisdiccional para compeler a la persona imputada para que preste declaración en un proceso penal. Este derecho entendido de la manera más amplia posible, como lo es en Argentina, impide que el acusado declare bajo juramento. Sin embargo, cuando una persona imputada ejerce este derecho, su silencio de alguna forma ingresa al proceso y hay quienes sostienen que es pasible de ser valorado por el órgano juzgador. Sin ingresar en la discusión sobre su valoración, aunque haciendo algunas consideraciones previas, este trabajo busca mostrar la manera en que el silencio ingresa al proceso y cuáles son las normas procesales que lo permiten, y cuál debería ser el camino a seguir para que el imputado no se vea en el dilema de declarar y autoincriminarse, o callarse y que su silencio sea valorado en su contra. Así, en el punto I haré una breve introducción. En el punto II mostrare de la forma más escueta posible aquella postura que sostiene que el silencio del acusado es materia de valoración. En el punto III, mostraré la opinión opuesta, es decir, que el derecho al silencio debe ser ejercido sin consecuencias adversas. El punto IV trata el objeto de este trabajo, es decir, mostrar de qué manera el silencio ingresa en el proceso penal, para comenzar a pensar alternativas en pos de que el acusado pueda decidir no participar de ninguna forma. Finalmente terminaré con unas breves conclusiones.

I. Introducción

En los trabajos sobre epistemología jurídica, el eje central gira en torno a reducir los errores en las sentencias judiciales. De esta manera, se busca lograr que una hipótesis

sea verdadera¹ y que su afirmación esté justificada. En el proceso, parte del problema puede radicar en las garantías constitucionales de las personas, que imponen límites infranqueables al poder estatal y a los métodos de investigación, dificultando la averiguación de la verdad. Nadie dudaría en afirmar que un respeto óptimo por estas garantías complica alcanzar la verdad de los hechos y, por ende, dictar una sentencia correcta.² Así, quienes realizan tareas de investigación a menudo enfrentan impedimentos al llevar a cabo sus pesquisas debido al respeto por dichas garantías, debiendo dejar de lado ciertos elementos probatorios que, de otro modo, aumentarían la probabilidad de alcanzar una verdad material³. Uno de estos obstáculos es el reconocimiento del derecho al silencio y la prohibición de la autoincriminación forzada. Veamos cómo funciona.

II. La valoración del silencio.

LARRY LAUDAN es uno de los principales exponentes de la postura que sostiene que el único objetivo de un proceso penal debe ser la búsqueda de la verdad. En su libro (2013), plantea que permitir que un acusado guarde silencio no favorece este objetivo y puede aumentar las absoluciones erróneas⁴.

* Abogado (UM). Mg. en Derecho Penal (UTDT). Mg. en Razonamiento Probatorio (U. de Girona y U. de Génova). Una versión de este trabajo fue presentada como tesis para obtener el grado de Magister en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina), bajo la dirección de la Prof. Mg. Diana Veleda, y un jurado integrado por los Prof. Dres. Hernán Gullco y Diego Dei Vecchi y la Mg. Rocio Buosi. Agradezco a los cuatro por sus críticas y sugerencias.

¹ En el trabajo, siempre que me refiera a la verdad, lo hago conforme la teoría de la verdad como correspondencia. De acuerdo con esta teoría “decir que un enunciado o una afirmación es verdadera quiere decir que aquello que tal afirmación describe ha ocurrido en la realidad... La verdad sería, de acuerdo con esta concepción, una relación de correspondencia o conformidad entre el lenguaje, de un lado, y los hechos o la realidad, de otro”, GONZÁLEZ LAGIER (2022), p. 22.

² Llamo en este sentido “sentencia correcta” a aquella que logra castigar siempre al culpable y absolver al inocente. Ver esto en LAUDAN (2013), p. 28.

³ Esto es una consecuencia, a su vez, de la regla de exclusión probatoria, receptada ampliamente en el sistema jurídico argentino, al menos desde CSJN, Fallos: 46:36 (“Charles Hnos.” [1891]). También se encuentra expresamente previsto, pero regulado de manera bastante vaga, en el CPP de Buenos Aires (arts. 3, 211 y 357) y en el nuevo CPP Federal (art. 10). En el ordenamiento jurídico de Chile, por su parte, se encuentra regulado de manera más concreta, en el art. 276, inc. 3° del CPP de Chile. Para una discusión sobre los fundamentos y alcance de la regla de manera general, puede verse MIRANDA ESTRAMPES (2010); LIMARDO (2021); CORREA ROBLES (2021).

⁴ LAUDAN (2013), pp. 212-213. El argumento de LAUDAN es específico para el sistema del *Common Law* estadounidense. Sin embargo, es igualmente de utilidad para analizar el problema en los sistemas como los nuestros, que provienen de la tradición continental, ya que los textos constitucionales que contienen la cláusula son similares y el análisis que los tribunales han hecho sobre ella tampoco varía demasiado. A su vez, Esta idea puede derivar de un principio básico de racionalidad, según el cual se incrementan nuestras posibilidades de acierto cuanto mayor sea la cantidad de elementos de juicio a favor de nuestra afirmación. Puede encontrarse esta idea en los trabajos de JEREMY BENTHAM (1838-43) en *Rationale of Judicial Evidence*, 7 vols., editado por STUART MILL, J., citado por la edición incluida en BENTHAM, 1838-43, vols. VI y VII. Al comienzo del capítulo, LAUDAN cita a BENTHAM: “Si todos los delincuentes de todo tipo hubiesen pensado y elaborado un sistema con base en sus propios deseos, ¿no es ésta regla [el derecho a permanecer en silencio] lo primero que hubiesen establecido para su propia seguridad?”.

La lógica detrás de este razonamiento se encuentra en cierta interpretación que suele hacerse de la Quinta Enmienda de Estados Unidos⁵, que sostiene que el derecho al silencio no implica inmunidad total, y el jurado debería tener libertad para interpretar el silencio del acusado como estime conveniente. De esta manera, la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU. no impide que se saquen inferencias adversas del silencio del acusado, ya que, históricamente, se permitía hacer tales interpretaciones⁶.

RONALD ALLEN, por su parte, sostiene que la Quinta Enmienda es letra muerta, ya que su propósito original, que era proteger contra la tortura, ya está superado por la prohibición de declaraciones obtenidas bajo tortura⁷. Además, sostiene que tampoco es posible nada parecido a interrogatorios secretos o juramentos autodestructivos como era el *ex officio*⁸.

En una mirada más estrecha del derecho a guardar silencio, uno podría decir que lo que realmente se protege es al acusado de cualquier coerción estatal, pero no se lo libra

⁵ La Quinta Enmienda de Estados Unidos, en la parte que aquí interesa, reza: "...nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law...".

⁶ Así, cuando se adoptó la *Bill of Rights*, aún no era costumbre que los acusados fueran representados por un abogado defensor, y en el caso de no declarar era muy probable que fueran condenados por no contar con ningún tipo de defensa. Para LAUDAN (2013), p. 219, "[n]ada hay en la Quinta Enmienda o en algún otro lugar de la Constitución sobre ésta prohibición. (...) desde los primeros días de la República hasta mediados del siglo XX se acostumbraba que el jurado tuviera libertad de hacer cualquier inferencia del silencio de los acusados que les pareciera apropiada".

⁷ Sin embargo, esto no es tan claro como parece. La discusión sobre el alcance del derecho a no autoincriminarse y hechos de extrema gravedad se encuentra en pleno debate. Así, se cuestiona "si la prohibición de la tortura, que se encuentra fundada en la dignidad humana, debe experimentar o no limitaciones en determinados grupos de casos" (GRECO, 2014, pp. 17-18). GRECO reflexiona sobre el debate que se da en Alemania tras el caso "METZLER-GÄFGEN-DASCHNER" y en Estados Unidos tras el atentado del 9/11, respecto a la posibilidad o no de aplicar tortura en casos donde el tiempo sea muy valioso para salvar la vida de personas bajo peligro inminente. Pero existen también casos regulados donde se aplican métodos de tortura específicos para lograr confesiones, por ejemplo, la privación de sueño. Así lo explica el doctor en neurociencia MATTHEW WALKER (2020), p. 327, al escribir "Un informe en 2007 titulado: 'Leave No Marks: Enhanced Interrogation Techniques and the Risk of Criminality' (Sin dejar huellas: técnicas de interrogatorio mejoradas y riesgo de delincuencia) ofrece una inquietante descripción de tales prácticas en la actualidad. El documento fue compilado por Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos), un grupo que tiene como objetivo acabar con la tortura humana. Tal como indica el título del informe, muchos de los modernos métodos de tortura están diseñados para no dejar evidencia de agresión física. La privación de sueño es el paradigma de este objetivo, y, mientras escribo este libro, todavía se utilizan para los interrogatorios en países como Birmania, Irán, Irak, Estados Unidos, Israel, Egipto, Libia, Pakistán, Arabia Saudita, Túnez y Turquía". El uso de estas técnicas está reflejado en el excelente documental de Netflix llamado "The Confession Tapes" (2017).

⁸ ALLEN (1996), p. 14. El juramento "*ex officio*" (o también conocido como "*oath ex officio*") era un juramento que se utilizaba durante la época de la inquisición que se le tomaba a cualquier persona acusada de un procedimiento. Este interrogatorio era el primer acto del procedimiento, donde el Fiscal tenía la posibilidad de preguntarle a quien se encontraba sujeto a dicho proceso, cualquier tipo de preguntas con tal de extraer de sus dichos algún tipo de indicio -o confesión- que haga presumir la autoría del hecho investigado o la comisión de otro tipo de delito del cual hasta ese momento no se tenía conocimiento. Ver en BRAVO AGUILAR (2000), p. 148.

de las inferencias que los jueces puedan sacar⁹. REDMAYNE argumenta que el privilegio contra la autoincriminación no tiene razones suficientemente buenas para mantenerse, considerando que, en otros momentos de la investigación, permitimos sin mucho cuestionamiento que el Estado utilice pruebas y que, ante una negativa, no nos sorprenda sacar conclusiones negativas sobre esa decisión¹⁰.

En el caso “González Bonorino”¹¹, la Corte Suprema de Argentina no hizo lugar al planteo de la defensa que sostenía que se había vulnerado la garantía protegida en el art. 18 de la CN Argentina, cuando el juez, al dictar sentencia, tomó como prueba en su contra la negativa a declarar del acusado. En palabras de la Corte: “No es violatoria del art. 18 de la Constitución Nacional -en cuanto a la prohibición de obligar a alguien a declarar contra sí mismo- la sentencia que se refiere a la **negativa del procesado a prestar declaración indagatoria en un primer momento** ya que, a los efectos de descalificar las exculpaciones del acusado, el tribunal computó toda suerte de probanzas directas, indirectas y circunstanciales”¹² (el resaltado es propio).

Otro argumento sostiene que, en contextos donde existe una fuerte evidencia en contra del imputado, su falta de respuesta refuerza la veracidad de la prueba adversa. Este razonamiento es consistente con la idea de que el silencio no debería ser gratuito, y si un acusado no explica una prueba en su contra, esta adquiere mayor peso.

La postura de Laudan también encuentra cierto respaldo por la jurisprudencia estadounidense. En “Adamson v. California”¹³, la Corte Suprema permitió que se destacara la falta de explicación del acusado como un elemento en su contra. De manera similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos como “John Murray v. United Kingdom”¹⁴ y “Condron v. United Kingdom”¹⁵, aceptó que el silencio del acusado

⁹ REDMAYNE (2007), p. 214. El autor advierte que esta posibilidad es la que se sostuvo en el caso “Murray v. United Kindom” (2001 del TEDH). Sin embargo, también sugiere a su vez que si se decide valorar, se debe hacer cuidadosamente, “especialmente cuando se utiliza un jurado como decisor”.

¹⁰ REDMAYNE (2007), p. 217. Podría ser el caso de negativa ante una extracción compulsiva de sangre o negarnos a realizar una prueba de alcoholemia cuando estamos manejando, o incluso después.

¹¹ CSJN-Fallos, 300:610 (1978).

¹² Si lo que sostiene la Corte Suprema es cierto, entonces “parece imposible poder adjudicarle a ese principio rango constitucional”, CARRIÓ (2015), p. 487.

¹³ 332 US 46 (1947). El acusado se había negado a declarar invocando la Quinta Enmienda, por miedo a que, durante el interrogatorio, el fiscal haga especial referencia a sus antecedentes penales. Dijo el voto mayoritario: “*parece muy normal que cuando un acusado tiene la oportunidad de negar o explicar los hechos y decide no hacerlo, la acusación deba poner de relieve la fuerza de la prueba comentando la falta de explicación o negación del acusado*”, LAUDAN (2013), p. 220.

¹⁴ Caso número 41/1994/488/570. Sentencia del 18 de enero de 1994.

¹⁵ App N° 35718/97. Sentencia del 2 de agosto de 2000.

puede ser utilizado como apoyo para la evidencia presentada por la fiscalía, siempre que no sea la única prueba.

Este tipo de inferencias abductivas, como proponen ALLEN y PARDO, permiten que la hipótesis más fuerte sea la que prevalezca¹⁶.

También se ha argumentado que prohibir inferencias sobre el silencio en situaciones donde el acusado tiene información relevante pero decide callar en puntos cruciales, sería contraintuitivo. Si el acusado, en medio de una declaración, elige guardar silencio en lugar de mentir, es inevitable que el jurado interprete ese silencio de alguna manera.

III. Contra la valoración del silencio

Existen argumentos epistémicos y normativos contra la valoración del silencio del acusado. Voy a comenzar por los primeros.

¿Podemos imaginar una situación en la que, al reprochar a alguien una acción, no esperemos una respuesta, y, de ser así, tomemos su silencio de manera favorable? Me atrevo a afirmar que no, ya que generalmente esperamos que la persona a la que cuestionamos nos ofrezca alguna explicación, por absurda que sea. A partir de ahí, decidiremos si esa explicación nos convence o no, y en caso de permanecer en silencio, lo evaluaremos de forma negativa.

Esta noción se puede aplicar a un proceso penal, especialmente al discutir el argumento de LAUDAN, que sostiene que la incapacidad de valorar el silencio podría resultar en más absoluciones materialmente falsas¹⁷. Esto se debe a que un acusado que no colabora con la investigación omite una prueba crucial, privando al juzgador de un elemento esencial para una decisión adecuada: su declaración. Esta idea implica que las absoluciones erróneas dejarían en libertad a acusados que, de haber cooperado, deberían haber sido condenados.

Sin embargo, considero que el error de LAUDAN radica en asumir que el acusado que ejerce su derecho al silencio lo hace necesariamente para no autoincriminarse o porque tiene información perjudicial. Hay múltiples casos en los que las confesiones, tan deseadas por los acusadores, resultaron ser falsas, y donde el silencio se mantiene por

¹⁶ ALLEN Y PARDO (2019), p. 20-21.

¹⁷ LAUDAN (2013), p. 213.

razones ajenas a la culpabilidad¹⁸. Esta postura se basa en intuiciones y prejuicios, suponiendo que los acusados silenciosos tienen algo que ocultar y no cooperan con la investigación sin respaldo empírico.

Un acusado puede tener razones personales para no colaborar, como una profunda desconfianza hacia el sistema judicial. Tiene el derecho de mantener esos motivos en privado¹⁹. Para que su derecho a guardar silencio sea pleno, debe sentirse seguro de que no habrá consecuencias negativas por su decisión. El inculcado no debería estar obligado a pronunciarse sobre la investigación en su contra²⁰.

Uno podría argumentar que, ante abundantes pruebas en su contra, una persona inocente haría todo lo posible por demostrar su inocencia, mientras que solo una culpable se abstendría de hablar. Sin embargo, en la causa “Carrera, Fernando Ariel s/ Recurso De Casación”, la jueza LILIANA CATUCCI observó que el silencio se puede considerar. Sostuvo en su decisión que “[s]in tomarse como prueba en contra su negativa a declarar, pese a ser un acto de defensa, **lo cierto es que ese silencio no deja de llamar la atención, máxime frente al trágico suceso que se le enrostraba. No pudo deberse a su deteriorado estado de salud, porque la voluntad de hablar para defenderse es ingénita al ser**

¹⁸ Según Innocence Project, de 251 casos en los que se revirtieron condenas erróneas, en 28% de los casos había confesiones falsas. También, de la totalidad de los casos, en un 5% se declararon culpables por delitos que no habían cometido, en acuerdos previos al juicio (ver <https://innocenceproject.org/exonerations-data/>, revisado por última vez el 29 de julio de 2024).

¹⁹ A modo de ejemplo, EMMANUEL CARRÈRE (2022), en su genial crónica judicial sobre el juicio por los atentados en París, Francia, del 13 de noviembre de 2015, relata los momentos en que los acusados -y luego condenados- deciden acogerse a su derecho al silencio en el debate. Así, el primero es Osama Krayem, y dijo: “[n]adie está aquí para intentar comprender y no creo que expresarme acerca de lo que se me reprocha cambie en absoluto la decisión del tribunal. He tomado la decisión de guardar silencio hasta el fin de los debates» (p. 132). En esta misma crónica, el autor cuenta sobre el silencio de otro acusado que había sido condenado previamente en otro juicio, Mohamed Bakkali donde, de la siguiente manera, explicó por qué no va a responder: “Ya me han juzgado. Respeté las reglas del juego y no ha cambiado nada. Me condenaron sin ninguna prueba por algo que no he hecho. Sé que, diga lo que diga, mi palabra no tiene valor, conque ya no tengo fuerzas para luchar ni explicarme. Por eso me acojo a mi derecho al silencio’. Silencio general. El presidente acusa el golpe. Como nosotros, piensa que el juicio se desmorona. Se dice que, después de Krayem, las fichas de dominó corren el riesgo de derrumbarse unas sobre otras y que cada vez será más difícil decir que no importa, the show must go on. Intenta ablandar al rebelde. ‘Está en su más estricto derecho (cosa indudable). Pero usted sabe que eso puede serle desfavorable’. ‘Todo me es desfavorable. Haga lo que haga’. ‘Sí, pero bueno, ha recurrido. Las absoluciones tras un recurso... existen’. La tentativa es lastimosa, Bakkali ni siquiera exagera la ironía: ‘¿En un caso de terrorismo tan grave?’» (p. 138).

²⁰ SANCINETTI (2016), p. 97. Si el Estado decide valorar el silencio, como se observa en Inglaterra, Francia o Singapur, podría estar entrometiéndose en asuntos personales que nada tienen que ver con el proceso, perjudicando a alguien que está ejerciendo su derecho por respeto a sí mismo. El autor ofrece un ejemplo ilustrativo al citar a FÉLIX LUNA en su libro “Soy Roca”. Narra la historia de Roca y el gaucho Cabituna, quien fue acusado de ser un espía y ejecutado sin reflexión. El único murmullo del gaucho fue: “Matan a un inocente”. Roca, al enterarse de la verdad, sintió un profundo remordimiento, lo que resalta que no siempre los motivos de una persona para no colaborar están ligados a la culpabilidad (2016), pp. 95-96.

humano. En efecto, por experiencia se conocen situaciones, en las que aún con un mínimo de vida, el inocente cuenta lo sucedido”²¹ (el resaltado es propio). A favor de mi postura, en la causa finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los votos de los 4 ministros, absolvió a Fernando Carrera el 25 de octubre de 2016²².

Respecto a la generalización “*el que calla otorga*”, esta es errónea por dos motivos. Primero, no hay evidencia empírica que la respalde, por lo que carece de validez²³. Aunque se considere de sentido común, existen muchas razones para el silencio que no están relacionadas con la culpabilidad. Además, asumir que un acusado silencioso es culpable puede no ser neutral y afectar la distribución de errores que intentamos evitar en un juicio penal. Este sesgo epistémico puede perjudicar a quien ejerce su derecho a guardar silencio.

Como señala SANCINETTI, la interpretación del silencio carece de rigor científico. El juez que se considera “experimentado” a menudo acumula prejuicios sobre el significado del comportamiento no verbal, sin tener una base científica sólida. Esto pone de manifiesto cómo los sesgos pueden distorsionar el juicio, afectando la protección de la inocencia²⁴.

El segundo motivo se refiere a que, si hay abundante evidencia en contra de una persona, no es necesario recurrir al silencio como inferencia adversa. Si ya hay suficiente prueba para condenarla, ¿por qué añadir una inferencia más? Este argumento cuestiona la defensa más débil de valorar el silencio como prueba.

También, aunque desde una perspectiva lógica la conclusión negativa del silencio puede parecer válida, la restricción a su valoración surge de una premisa normativa²⁵.

La primera que quiero nombrar es al *nemo tenetur*. Esta garantía, interpretada ampliamente, puede entenderse como la prohibición de que el Estado exija a una persona

²¹ Esta última frase llama la atención, porque, como bien sostiene CARBAJAL (2020), “el inocente cuenta lo sucedido” es la contraparte de el culpable que calla (p. 155).

²² Votos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti Y Carlos Rosenkrantz. Si bien la condena terminó siendo revocada por la Corte sobre la base de que acervo probatorio era insuficiente para tener por probada la culpabilidad, sirve como ejemplo de un caso concreto donde la persona imputada del delito era inocente y sin embargo decidió guardar silencio durante todo el proceso.

²³ Según SCHAUER (2006), pp. 7-19, puede haber casos en donde pese a la existencia de alguna excepción a la generalización, sea razonable usarla, dividiéndolas en “generalización malas y buenas”. Para el autor, “la existencia de casos particulares en los que la generalización no se cumple rara vez nos hace abstenernos de usar la generalización, siempre que la generalización sea cierta para la mayoría de los casos” (p. 9).

²⁴ SANCINETTI (2013), p. 14.

²⁵ MILTON PERALTA (2014), p. 410.

aportar elementos probatorios en su proceso penal. En el proceso penal, el derecho a guardar silencio es uno de los derechos fundamentales del imputado, permitiéndole decidir libremente si se convierte o no en fuente de prueba. Por lo tanto, su actitud procesal, específicamente la opción de no declarar, no debe considerarse como evidencia, lo que significa que es equivalente a cero y no se le puede atribuir ningún valor corroborador de cargo²⁶.

De manera concordante, para MILTON PERALTA, la mejor explicación a que el derecho a la autoincriminación tenga jerarquía constitucional es porque resulta inmoral “*exigirle al imputado que colabore en un proceso llevado en su contra*”²⁷.

La participación del acusado en el juicio en su contra es, más que una obligación, una parte integral de la defensa en juicio en términos generales²⁸, y de la declaración en términos más específicos. La defensa en juicio, reconocida en ambas constituciones²⁹, es un derecho fundamental que permite a las personas ejercer cualquier acto de defensa ante una acusación estatal. Cuando el Estado activa su poder punitivo y selecciona a quien desea perseguir, esa persona, por más indeseable que sea, tiene el derecho de elegir defenderse.

En Alemania, el Tribunal Supremo Federal (*BGH*), argumentó en este sentido respecto del silencio total del imputado en el proceso penal³⁰. Sostiene que el silencio se encuentra excluido del ámbito de la valoración probatoria del juez. Así, hay que “*entender el derecho a guardar silencio como una manifestación concreta de la garantía de no autoincriminación –nemo tenetur se ipsum accusare–... Dicha garantía asegura al imputado la posibilidad de decidir, libre de toda presión, si y en qué medida desea intervenir en el proceso penal. En este sentido, el nemo tenetur protege al acusado de ser*

²⁶ ANDRÉS IBÁÑEZ (2015), p. 363.

²⁷ MILTON PERALTA (2014), p. 407.

²⁸ Así lo entendió también el TEDH: “*si bien la Convención Europea no contiene (a diferencia de la Convención Americana) una cláusula que expresamente reconozca el derecho contra la autoincriminación, se considera que el citado derecho se encuentra incorporado al concepto genérico de juicio justo del art. 6 de la Convención Europea (conf. caso ‘SAUNDERS’, cit., parr.68)*” visto en GULLCO (2012). “Las declaraciones policiales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación”, *La Ley*, 2012.

²⁹ Art. 18 Constitución Nacional Argentina: “... [e]s inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”; Art. 19, inc. 3° Constitución Política de la República de Chile: “[t]oda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiere sido requerida”.

³⁰ En Alemania distinguen tres tipos de silencio: Total, temporal y parcial. El temporal, es cuando lo ejerce en algunas etapas del proceso, pero en otras no. Para la jurisprudencia y doctrina mayoritaria de Alemania, este silencio tampoco puede ser objeto de valoración. Por el contrario, el silencio parcial, que es aquel ejercido sobre determinados temas o solamente ante algunas preguntas específicas, tanto la jurisprudencia como la doctrina alemana sostuvieron que este sí es valorable, CORREA ROBLES (2018), p. 239.

obligado a prestar declaración y de esta forma de contribuir activamente a la formación de convicción en su contra. El derecho de no autoincriminación corresponde en este sentido –de acuerdo al BVerfG– a una garantía de rango constitucional y esencial de un Estado de Derecho, fundada en el respeto por la dignidad humana. Su resguardo, manifestado paradigmáticamente en la imposibilidad de valorar el silencio, corresponde a un deber inexcusable por parte del Estado”³¹.

El principio de inocencia –o presunción– obliga al Estado a tratar a cualquier sospechoso como si fuera inocente, o al menos a no tratarlo como culpable. El Estado, a través de la acusación, tiene la carga de la prueba durante todo el proceso para intentar desvirtuar esa presunción de inocencia³². Por otro lado, la persona acusada puede elegir defenderse de la manera que considere más conveniente. Primero, por el principio *nemo tenetur*, que no lo obliga a colaborar en el proceso, es decir, puede ser un sujeto activo o pasivo durante el juicio. Y segundo, por el derecho de defensa que le asiste.

Como mencioné previamente, el argumento epistémico sugeriría que, ante una abrumadora prueba a favor de la hipótesis acusatoria, el acusado silencioso e inocente hablaría. Sin embargo, creo que esto no es así. Si existe tanta evidencia en contra del acusado y la hipótesis acusatoria está probada, entonces el decisor no tiene necesidad de sumar al acervo probatorio ninguna inferencia derivada del silencio del acusado. Cuando el peso de las pruebas presentadas en el debate es tan contundente, suponer que el acusado silencioso clamaría su inocencia es reconocer que la certeza no estaba completa. De ser así, se estaría violando el principio de inocencia y su corolario procesal, el *in dubio pro reo*, ya que el juez admitiría que, sin esa inferencia, la duda persistía hasta ese momento previo a la sentencia.

Para reforzar este argumento, consideremos las relaciones lógicas entre los operadores deónticos³³. Si una persona tiene el derecho a guardar silencio, esto implica que no tiene el deber de hablar. La existencia de un deber surge cuando hay una sanción

³¹ CORREA ROBLES (2018), p. 243.

³² El imputado no tiene el deber de probar nada, ya que goza de una situación jurídica que no debe ser construida, sino que debe ser destruida, VÉLEZ MARICONDE citado en GARCÍA (2018), p. 306. Para ver una postura en contra de esta carga de la prueba, ver NIEVA FENOLL (2022).

³³ Agradezco especialmente a DIEGO DEI VECCHI por la idea de sumar este argumento. Para profundizar más sobre las relaciones lógicas entre operadores deónticos, ver ALCHOURRON Y BULYGIN (2021), pp. 60-67.

por no cumplirlo, por lo que si el silencio del acusado se utiliza para hacer inferencias perjudiciales, eso conlleva una contradicción.

La lógica sería la siguiente: si alguien tiene el derecho a guardar silencio, no debería haber una obligación de hablar. Sin embargo, si el silencio resulta en consecuencias negativas, esto implica una obligación implícita de hablar para evitar tales consecuencias. Por lo tanto, al permitir inferencias perjudiciales a partir del silencio, se niega efectivamente el derecho a guardar silencio, porque el acusado se vería obligado a hablar para no perjudicarse.

Finalmente, En Argentina, la intimidad es reconocida como un bien jurídico protegido por el derecho constitucional (art. 18 C.N.) y otras normativas³⁴. Su concepto se refiere a los espacios que las personas eligen mantener fuera del conocimiento público. Por otro lado, el principio de lesividad establece que las penas deben basarse en hechos y no en aspectos de la personalidad³⁵. Si el silencio de una persona es valorado negativamente, se estaría extendiendo el daño punitivo a su privacidad o un aspecto de su personalidad, algo que no puede considerarse una conducta punible.

En un juicio, donde se decide si se aplicará un castigo, cualquier intervención estatal en la esfera de la privacidad debe ser neutralizada, ya que dar valor probatorio al derecho al silencio implicaría considerar esta actitud como perjudicial. Esto podría tener consecuencias negativas en la investigación y actuar como una extensión del daño investigado³⁶. Si se valora el silencio de manera negativa, podría convertirse en la prueba que falta para una condena.

No se puede permitir que quien debe valorar la prueba en un proceso introduzca como elemento probatorio algo que no ocurrió durante el juicio³⁷. La Corte Argentina, en

³⁴ Art. 1071 bis Cód. Civil; C.P., arts. 150 y ss., Corps. 2 y 3, Tít. 5, Libro segundo, C.P. Ver MAER (2012), p. 583.

³⁵ BRACACCINI (2016), p. 583. En igual sentido, ver el caso “Fermín Ramírez v. Guatemala”, de la Corte IDH, sentencia del 20 de junio de 2005.

³⁶ En Francia, por ejemplo, se valora positivamente a la persona que confiesa, mensurando su pena de una manera menos gravosa que si se niega a declarar.

³⁷ Como aclaré previamente, en los casos en que la persona acusada decidió no participar en ningún momento del proceso, por lo que el silencio no ingresaría en el juicio. Existe un problema en los códigos procesales de Argentina, que a mi entender Chile no padece. El art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación y el art. 308 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires establecen el llamado a declaración del imputado cuando existiera un estado de sospecha. Si bien en la reglamentación procesal existe la facultad de abstención que reglamenta el derecho al silencio del art. 18 de la CN, el simple hecho de llamar al sospechoso para que brinde explicaciones o que diga expresamente que no las quiere brindar es un resquicio de la inquisición, ya que de esta manera entra el silencio del acusado en el proceso. En Estados Unidos esto fue discutido ampliamente y generó una serie de precedentes muy interesantes. En el

el fallo "Montenegro"³⁸, estableció que si una persona es obligada a declarar en su contra, dicha declaración debe considerarse inexistente y no puede ser valorada en relación a la veracidad de los hechos. Permitir que se valore el silencio del acusado significa introducir en el proceso decisiones que son parte de su intimidad y pensamientos, los cuales no deberían tener consecuencias negativas mientras no afecten a terceros. La palabra del acusado puede ser considerada como prueba siempre que sea plausible y respaldada por otros elementos, siendo fundamentalmente un medio de defensa³⁹.

IV. El ingreso del silencio

Como mencioné, existen razones tanto epistémicas como normativas para evitar que el silencio del acusado se tome como un elemento probatorio. Sin embargo, en nuestros códigos procesales argentinos, hay normas que invitan a los jueces a prestar atención a dicho silencio.

El problema principal de los códigos procesales mixtos —como el Código Penal Nacional (CPPN) y el de la provincia de Buenos Aires (CPPBA), entre otros— es el llamado a indagatoria. El artículo 294 del CPPN y el artículo 308 del CPPBA establecen que se puede convocar al imputado⁴⁰ a declarar en caso de que exista un estado de sospecha. Aunque el derecho al silencio está protegido por el artículo 18 de la Constitución Nacional y las reglamentaciones procesales permiten la abstención, el simple hecho de citar al sospechoso para que brinde explicaciones o que se vea obligado a manifestar su negativa a declarar, constituye una reminiscencia del sistema inquisitivo. De este modo, el silencio del acusado se introduce inevitablemente en el proceso.

caso "GRIFFIN V. CALIFORNIA" (380 US 690 [1965]) prohibió la posibilidad de que la fiscalía de alguna manera haga referencia al silencio del acusado durante el debate en su alegato, argumentando que esto violaría la Quinta Enmienda. Luego vinieron dos casos importantes más. En "DOYLE V. OHIO" (426 US 620 [1976]) se creó la que se conoce como la regla DOYLE, que prohíbe a los jueces y a la acusación informar sobre si el acusado rehusó responder preguntas al momento de su detención. En "CARTER V. KENTUCKY" (450 US 288 [1981]) también se estableció que si el defensor lo solicitaba, el Juez debía instruir específicamente al jurado para que no le diese significado alguno al silencio del acusado. En contra de esto, de una manera pesimista, HENDLER (2014), p. 226, sostiene que "[p]or más categórica que sea la norma que indica lo contrario, o sea, que no deben sacarse consecuencias de que alguien haya guardado silencio frente a incriminaciones que le conciernen directamente, es sumamente difícil evitar la convicción que eso trae a la mente de quien debe juzgar".

³⁸ CSJN-Fallos, 1:350 (1863).

³⁹ FERRAJOLI (1995), p. 608; SANCINETTI (2000), p. 403.

⁴⁰ También art. 306 del CPP de Córdoba. En contraposición de esto, los códigos procesales de Neuquén (art. 53), Río Negro (art. 44) o el nuevo CPPF (art. 70) entre otros, muestran un sano avance respecto de la declaración, al no llamar al imputado a dicho acto, pero estableciendo la libertad para que pueda declarar cuantas veces quiera durante el proceso.

En las audiencias preliminares destinadas a discutir la admisión de la prueba, es habitual que se incluyan las actas generadas al momento de llamar al acusado a declarar. Este tipo de actas suelen valorarse como prueba, desde el procesamiento hasta la sentencia. En legislaciones como la de Estados Unidos⁴¹, o en códigos como el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) y los de Río Negro o Neuquén, la declaración del acusado solo aparece si este decide voluntariamente hacerlo. Sin embargo, no existe ninguna legislación que impida por completo que el silencio del acusado influya en el proceso. Esto se evidencia cuando se acepta como prueba el acta en la que el acusado se niega a declarar o cuando, al final del juicio, se le brinda la oportunidad de pronunciar unas últimas palabras. ¿Puede el juez o el jurado ignorar completamente este silencio? En mi opinión, no.

Imaginemos un juicio por jurados regulado por el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), en el que la persona acusada no ha declarado en ningún momento. El jurado ha seguido atentamente el debate, valorando toda la prueba presentada, pero aún tiene dudas sobre la hipótesis acusatoria, ya sea porque la defensa del imputado se dedicó a refutarla, o porque la prueba, por sí sola, no resultó convincente. Supongamos también que, hasta este punto, el jurado no se ha cuestionado la falta de participación del acusado en el proceso. Aparentemente, el jurado absolvería al imputado aplicando el principio de *in dubio pro reo*, ya que la prueba no ha sido suficiente para alcanzar el convencimiento necesario para condenar.

Sin embargo, el nuevo código, al regular el juicio, establece en su artículo 302: “ARTÍCULO 302.- Discusión final: ... Por último, se preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar y se convocará a las partes para comunicar la decisión jurisdiccional, señalando la hora de su lectura. El tribunal limitará razonablemente la duración de las últimas palabras de los imputados, a fin de evitar que se conviertan en nuevos alegatos”.

⁴¹ el caso “*Griffin v. California*” (380 US 690 [1965]) fue el primero de varios casos que prohíben que la fiscalía de alguna manera haga referencia al silencio del acusado durante el debate en sus alegatos, argumentando que esto violaría la Quinta Enmienda. Luego vinieron dos casos importantes más. En “*Doyle v. Ohio*” (426 US 620 [1976]) donde se creó la que se conoce como la regla Doyle, que prohíbe a los jueces y a la acusación informar sobre si el acusado rehusó responder preguntas al momento de su detención. En “*Carter v. Kentucky*” (450 US 288 [1981]) también se estableció que si el defensor lo solicitaba, el Juez debía instruir específicamente al jurado para que no le diese significado alguno al silencio del acusado. En contra de esto, de una manera pesimista, HENDLER sostiene que “Por más categórica que sea la norma que indica lo contrario, o sea, que no deben sacarse consecuencias de que alguien haya guardado silencio frente a imputaciones que le conciernen directamente, es sumamente difícil evitar la convicción que eso trae a la mente de quien debe juzgar” (2014, p. 226).

Este momento, a mi parecer, es lo que en inglés se conoce como un *game-changing*⁴². Si hasta ese punto los miembros del jurado no se habían percatado del silencio del acusado, esto ya no es posible. La única forma en que el jurado mantendría su decisión previa, tras notar este silencio, sería si la inocencia del acusado fuera absolutamente clara, o si la fiscalía hubiera realizado un trabajo tan deficiente que ni siquiera las dudas razonables quedarían superadas. De lo contrario, creo que este momento inclina la balanza en perjuicio del acusado⁴³.

Se podría considerar la posibilidad de que, para evitar estas malas prácticas — en las que el silencio del acusado podría valorarse de manera tácita— las legislaciones procesales eliminen aquellos artículos que obligan a la persona acusada a manifestarse en determinados momentos del proceso. Un modelo a seguir podría ser el de Estados Unidos, que comenzó a consolidarse a partir del caso *Griffin*⁴⁴. Derogar normas como las “últimas palabras” o el llamado a indagatoria, y establecer en su lugar una opción más amplia para que el acusado declare cuando lo desee (tal como ya sucede en las fases de instrucción⁴⁵ o debate⁴⁶), permitiría que la persona elija el momento oportuno para hablar, sin verse obligada a negarse expresamente.

De lo contrario, los encargados de emitir el veredicto habrán escuchado, directa o indirectamente, la negativa del acusado a declarar o, en el caso de las “últimas palabras”, habrán notado de forma evidente la falta de participación del acusado en su propio juicio. Este sistema es similar al que funciona en Estados Unidos. Un año después de *Griffin*, la

⁴² La expresión suele ser utilizada para referirse a eventos que cambian totalmente el rumbo que se estaba llevando. Por ejemplo, un claro ejemplo de un *game-changing* fue el gol que metió Lionel Andrés Messi en el segundo partido de la selección Argentina en el mundial Qatar 2022. Hasta ese gol, en el minuto 64, Argentina había perdido el primer partido y con un empate quedaba complicada la clasificación a la próxima fase del mundial. Ese gol, para muchos, es considerado como el momento en que Argentina levantó la cabeza y desde ahí, hizo todo el recorrido para ser la selección campeona del mundo, conquistando por tercera vez un mundial.

⁴³ También es pesimista en esto ORCE, cuando sostiene que “la pérdida de imparcialidad de un juez por alguna contaminación externa sobre el material del caso no puede solucionarse con reglas de no consideración normativa del material externo” (2012, p. 563). En el mismo sentido ROXIN, al afirmar que “las prohibiciones de valoración sólo ofrecen ‘una protección insuficiente’” (2008, p. 79).

⁴⁴ Ver *supra* nota 2.

⁴⁵ Artículo 162 del CPPBA: «... La persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse una actuación prevencional o un proceso, podrá presentarse ante la autoridad o el Ministerio Público Fiscal competentes para declarar o dejar constancia de que se ha presentado espontáneamente y solicita ser convocado, si correspondiera, por medio de una citación...”.

Artículo 279 del CPPN: “... La persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar...”.

⁴⁶ Artículo 358 del CPPBA: “... En el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa...”.

Artículo 380 del CPPN: “... En el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa...”.

Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso “*Miranda v. Arizona*”⁴⁷. En esa sentencia, se estableció que, al momento de detener a un sospechoso, la policía debe informarle de ciertos derechos, incluyendo el derecho a permanecer en silencio. Este es el último momento en el proceso judicial de Estados Unidos en que se interroga al acusado sobre si desea declarar. A partir de ese momento, la persona puede decidir libremente si declara o no, pero no puede ser convocada ni por la acusación ni por el juez.

V. Conclusiones

Durante el trabajo, en los puntos II y III hice un breve resumen del estado actual de la discusión en torno a la posibilidad de valorar el silencio del acusado. Mostré que las dos posturas, tanto la que sostiene que debe valorarse como aquella que no, lo hacen desde una posición de valor epistémico que otorgaría el silencio y sobre cómo debe interpretarse la normativa. Finalmente, mostré que, más allá de lo que se sostenga de un lado o del otro, lo cierto es que la manera en que se encuentra regulada la declaración del imputado en el proceso penal dificulta el ejercicio de no valorar el silencio, y lo convierte en un terreno fértil para que quien debe tomar la decisión final lo tenga en cuenta como prueba en contra de la persona acusada. Los códigos procesales más actuales van adoptando esta premisa, aunque de manera deficiente, porque en algún punto del proceso obligan a quien se encuentra en el banquillo de los acusados a expresarse. Una posible solución es brindarle la posibilidad a que el acusado se exprese en el proceso solo si quiere hacerlo, y no se lo obligue a expresar su negativa a participar declarando.

⁴⁷ 384 US 436 (1966). Las reglas Miranda (“*Miranda rules*”) establecen algo así: “Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno”. La Corte luego fue aplicando algunas excepciones a esta obligación. En el caso “*New York v. Quarles*” (467 US 649) decidió que en los casos de emergencia pública, la policía podía omitir dictar los derechos Miranda. Además, en 2010, se dictó el fallo “*Berghius v. Thompkins*” (560 US 370), en el cual la policía podía seguir interrogando al sospechoso en tanto y en cuanto éste no dijera expresamente que quería hacer uso de su derecho a guardar silencio. En Argentina hubo intentos de traer lo establecido en el caso Miranda, pero siempre la Corte decidió no llegar tan lejos. En casos como «*Francomano, Alberto José Y Otros S/ Inf. Ley 20.840*» (1987) y «*Cabral Agustín S/ Contrabando*» (1992) se discutió el accionar policial al momento de la detención de una persona, y como la información suministrada debía o no ser utilizada. Los resultados fueron desesperanzadores. Para un análisis más completo de estos casos ver a ALEJANDRO CARRIÓ (1988) y (1993).

Bibliografía

ALCHOURRON, CARLOS E. y BULYGIN, EUGENIO (2021): *Sistemas normativos. Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas* (Buenos Aires, Astrea, 2da edición, 3era reimpresión).

ALLEN, Ronald J. (1996): “The Simpson Affair, reform of the criminal justice process, and magic bullets”, en: *University of Colorado Law Review*, Vol. 76, N° 989.

ALLEN, Ronald J. y PARDO, Michael S. (2019): “Relative plausibility and its critics”, en: *The International Journal of Evidence and Proof*, Vol. 23 N° 1-2, pp. 5-59: [DOI: 10.1177/1365712718813781].

ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto (2015): *Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del Estado constitucional*, (Madrid, Trotta).

BENTHAM, Jeremy (1827): *Rationale of Judicial Evidence*, 7 vols., Stuart Mill, J., (editor), citado por la edición incluida en BENTHAM (1838-43), vols. VI y VII.

BRAVO AGUILAR, Nauhatzin T. (2000): “La Protección del Derecho en Contra de la Tortura y la Autoincriminación en México y Estados Unidos”, en: *Perspectivas del Derecho Mexicano. “Concurso Nacional de Ensayo Jurídico”*, (México, Universidad Nacional Autónoma de México), pp. 143-171.

BRACACCINI, Fernando (2016): “El derecho a la autonomía personal: las acciones privadas del art. 19 de la Constitución Nacional”, en: Gargarella, Roberto y Guidi, Sebastián (coordinadores), *Comentarios de la Constitución de la Nación Argentina - Tomo II*, (Buenos Aires, La Ley), pp. 545-584.

CARBAJAL, Fernando (2020): *La declaración del imputado en el litigio adversarial*, (Buenos Aires, Didot).

CARRÈRE, Emmanuel (2022): *V13. Crónica Judicial*, (Barcelona, Anagrama).

CARRIÓ, Alejandro (1988): “Otra vez el tema de las confesiones policiales: ¿llegó Miranda a nuestro país? Tal vez no, pero anda cerca”, en: *Revista La Ley*, pp. 966-974.

- (1993): “Otra vez el tema de las confesiones policiales: Miranda está lejos y espera” en: *Revista La Ley*, p. 258-262.

- (2015): *Garantías constitucionales en el proceso penal*, (Buenos Aires, Hammurabi, 6° edición actualizada y ampliada).

CORREA ROBLES, Carlos (2018): “Valoración del silencio del imputado en el proceso penal. Derecho alemán y derecho chileno”, en: *Revista de Derecho (Valdivia)*, Vol. 31, N° 2, pp. 237-261.

- (2021): “La función de la exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal y sus consecuencias: un estudio comparado”, en: *Política criminal*, Vol. 16, N° 32, pp. 644-677: [DOI: 10.4067/S0718-33992021000200644].

DUFF, Anthony, FARMER, Lindsay, MARSHALL, Sandra, & TADROS, Victor (2007): *The trial on trial. Volume three*, (Oxford, Hart Publishing).

FERRAJOLI, Luigi (1995): *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, (Madrid, Trotta, traducción Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés).

GARCÍA, Luis M., (2018): “El silencio y el privilegio contra la auto-incriminación en el proceso penal. Algunos problemas mal entendidos y otros problemas ocultos”, en: Hazan, Luciano y Plazas, Florencia (compiladores), *Garantías constitucionales en el enjuiciamiento penal. Nuevos estudios críticos de la jurisprudencia*, (Buenos Aires, Editores del Sur), pp. 285-393.

GONZÁLEZ LAGIER, Daniel (2022): “Prueba, hecho y verdad”, en: Ferrer Beltrán, Jordi (coordinador), *Manual de Razonamiento Probatorio* (México, Suprema Corte de Justicia de la Nación), pp. 1-46.

GRECO, Luis (2014): “Las reglas detrás de la excepción. Reflexiones respecto de la tortura en los grupos de casos de las ‘ticking time bombs’”, en: Greco, Luis, *Tortura, incesto y drogas: reflexiones sobre los límites del derecho penal*, (Buenos Aires, Hammurabi), pp. 16-62.

GULLCO, Hernán (2012): “Las declaraciones policiales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación” en: *La Ley. Suplemento Penal y Procesal Penal*, pp. 232-240.

HENDLER, Edmundo S. (2014): *Sistemas procesales comparados*, (Buenos Aires, Didot).

LAUDAN, Larry (2013): *Verdad, error y proceso penal. Un ensayo sobre epistemología jurídica*, (Madrid, Marcial Pons, traducción de C. Vázquez y E. Aguilera).

LIMARDO, Alan (2021): “Regla de exclusión de la prueba ilícita: una reevaluación de sus fundamentos con perspectiva comparativa”, en: Rovatti, Pablo (coordinador), *Manual sobre Derechos Humanos y Prueba en el Proceso Penal* (México, Suprema Corte de Justicia de la Nación), pp. 1-49.

MILTON PERALTA, José (2014): “La no obligación de declarar contra uno mismo”, en: Rivera (H), Julio C., Elias, José S., Grosman, Lucas S., Legarre, Santiago (directores), *Tratado de los Derechos Constitucionales* (Buenos Aires, Abeledo Perrot), pp. 399-439.

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel (2010): “La prueba ilícita: la regla de exclusión probatoria y sus excepciones”, en: *Revista Catalana de Seguretat Pública*, N° 22: pp. 131-151.

NIEVA FENOLL, Jordi (2022): “Réquiem por la carga de la prueba”, en: *Quaestio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio*, N° 4, pp. 39-60.

REDMAYNE, Mike (2007): “Rethinking the Privilege Against Self-Incrimination”, en: *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 27, N° 2, pp. 209-232.

SANCINETTI, Marcelo A. (2000): *Análisis Crítico del Caso Cabezas. Tomo I. La Instrucción*, (Buenos Aires, Ad Hoc).

- (2013): “Testimonio único y principio de la duda”, en: *InDret*, N° 3.

- (2016): *Casos de Derecho Penal. Parte general*, (Buenos Aires, Hammurabi, 3° edición reelaborada y ampliada).

WALKER, Matthew (2020), *Por qué dormimos*, (Buenos Aires, Paídos, traducción de Begoña Merino, M., Estela Peña).

